



## DECLARACIÓN MARCHA FEDERAL DE SALUD

20 DE MAYO DE 2026

REPÚBLICA ARGENTINA

Desde el **Foro por el a Derecho a la Salud** y todas las organizaciones sociales y políticas, sindicatos, asociaciones de pacientes, secretarías de salud, ministerios provinciales y universidades que lo conformamos, expresamos nuestra profunda preocupación frente al grave deterioro del sistema de salud argentino como consecuencia de las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional encabezado por el **presidente Javier Milei y su ministro de salud Mario Lugones**.

El **ajuste nacional en salud** no constituye solamente una reducción presupuestaria: implica el debilitamiento deliberado de capacidades estatales, la desarticulación de políticas públicas federales construidas durante décadas y el abandono de millones de argentinas y argentinos que hoy ven amenazado su derecho a la salud, en un contexto de **crisis del sistema democrático** con presos y presas políticas.

La **caída del presupuesto** nacional en salud alcanza niveles alarmantes. En 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 12% respecto de 2024 y un 40% respecto de 2023, mientras se sumó un recorte de más de 63 mil millones de pesos mediante la reestructuración del Presupuesto 2026. Este proceso se

da en un contexto de crisis económica y social caracterizado por la **pérdida de más de 300 mil empleos formales**, el deterioro salarial y el incremento sostenido de la pobreza.

Las consecuencias sobre el sistema sanitario son concretas: más de 742 mil personas perdieron su obra social o prepaga; el **80% de las Obras Sociales Nacionales no logra cubrir el Programa Médico Obligatorio** y afrontan una deuda millonaria con provincias y municipios; los costos de insumos médicos aumentaron un 213% y cerraron 277 empresas prestadoras del sector. Todo esto, sumado al aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la caída en la venta de medicamentos, genera una sobrecarga sobre el sector público: Hoy, aún sin haber comenzado el invierno, los hospitales tienen una **ocupación cercana al 90% y el 52% de ellas corresponde a personas con obra social**.

Al mismo tiempo, aumentan las enfermedades prevenibles y las complicaciones derivadas de patologías crónicas desatendidas. Entre las personas mayores de 45 años crecieron las internaciones por influenza y neumonía en un 60%, por diabetes en un 40%, por enfermedades cardíacas en un 37% y por enfermedades hipertensivas en un 36%. Y en los mayores de 65 años aumentaron un 200% las internaciones por diabetes, esto en un contexto de desfinanciamiento del PAMI que deja sin cobertura a las personas mayores.

Quienes estamos aquí hoy manifestamos nuestra profunda **preocupación por el ajuste sobre la salud de nuestros adultos mayores**. La reducción del presupuesto del PAMI en un 40%, los incumplimientos de pago a prestadores y la reducción de ingresos profesionales afectan directamente la calidad de atención de millones de jubilados y jubiladas. A esto se suma un aumento del 550% en medicamentos y la reducción de la cobertura al 100%: Los jubilados y jubiladas no están pudiendo comprar los medicamentos que necesitan o deben elegir entre medicamentos y comida.

**Las consecuencias sanitarias de las decisiones de Milei son más enfermedad y muerte:** En 2024, la tasa de mortalidad infantil en Argentina aumentó por primera vez

en dos décadas, pasando de 8,0 a 8,5 y la mortalidad materna tuvo un aumento del 37%, el valor más alto desde 2010 (sin contar pandemia). Al mismo tiempo aumentan los casos de sífilis y especialmente los casos de sífilis en embarazadas. Esto es una consecuencia directa de la reducción en el envío de medicamentos e insumos para partos, la interrupción de la provisión de leche y medicamentos para prematuros, el debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y la eliminación del Programa ENIA, así como del feroz ajuste del 70% en la entrega de métodos anticonceptivos y la interrupción de la distribución de preservativos.

Desde hace dos años venimos asistiendo a un grave ajuste en la política nacional de vacunación. Primero despidieron a trabajadores con muchísimos años de experiencia y formación en el tema, luego desarmaron la Comisión Nacional de Inmunizaciones y paulatinamente vienen realizando un achicamiento silencioso del Calendario Nacional de Vacunación, dejando sin vacunas a nuestros pibes y pibas. **Las demoras, interrupciones y faltantes afectan directamente campañas de prevención fundamentales y esto ya tiene consecuencias concretas sobre la salud de nuestro pueblo:** hemos tenido que atravesar nuevamente por un terrible brote de sarampión en nuestro país. Además aumentaron los casos de enfermedades que se previenen con vacunas como coqueluche, hepatitis A y meningitis, así como las internaciones por neumonías.

Y como tiro de gracia a nuestro sistema de salud, recientemente decidieron el **cierre del Programa Remediar**, una política pública histórica que abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría el 85% de las enfermedades frecuentes atendidas en el primer nivel de atención. Estas medidas ponen en riesgo el acceso a tratamientos esenciales para más de 20 millones de personas; incrementan internaciones evitables; debilitan la atención primaria de la salud; profundizan la saturación hospitalaria, especialmente en las guardias y dejaron a las médicas y médicos sin una herramienta fundamental que ahora deberán decirles a sus pacientes que se arreglen como puedan para conseguir los medicamentos que necesitan.

Igualmente grave es lo que está sucediendo con **la salud mental y los consumos problemáticos**. En un contexto de creciente complejidad, en el que nuestro pueblo está sufriendo y aumentan las internaciones y los suicidios, el Gobierno Nacional destinó presupuesto cero a salud mental; decidió el cierre del programa Remediar Salud Mental, redujo la estructura de SEDRONAR, intentó cerrar y desfinanció el Hospital Bonaparte, paralizó obras y dispositivos comunitarios y eliminó las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental que en muchas provincias es la única vía por la que el sistema de salud cuenta con psiquiatras y otros profesionales especializados. Y como si esto fuera poco avanzó un paso más yendo contra una conquista histórica de trabajadores, usuarios y familiares impulsando una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental, como si esa fuera la forma de resolver los enormes problemas que tenemos en ese campo. A este intento respondemos: No es modificando la ley, es con políticas públicas y presupuesto que se abordan los problemas de salud mental de nuestro pueblo.

Al mismo tiempo, **las personas con discapacidad atraviesan una situación de emergencia sin precedentes**. Los recortes y el desfinanciamiento están poniendo al borde del colapso a instituciones, transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares y prestadores que sostienen tratamientos y apoyos esenciales para miles de personas. Primero fueron las auditorías masivas, estigmatizantes y profundamente capacitistas, que instalaron sobre las personas con discapacidad una lógica de sospecha y persecución. Ahora el Gobierno amenaza con impulsar un proyecto de ley sobre supuestos “fraudes” en las pensiones por invalidez, mientras intenta avanzar hacia un “nomenclador libre” que profundizará la desregulación del sistema y beneficiaría a empresas privadas y prepagas, a costa del deterioro de las prestaciones y de las condiciones de trabajo de quienes sostienen el sistema de atención y cuidados.

El ajuste en salud dejó de ser una discusión presupuestaria abstracta para transformarse en consecuencias concretas sobre la vida y la salud de miles de personas. El vaciamiento y paralización de la DADSE —organismo encargado de garantizar medicamentos de alto costo para personas en situación de vulnerabilidad— produjo interrupciones en tratamientos oncológicos y de enfermedades graves,

mientras organizaciones de pacientes y familiares denunciaban judicialmente fallecimientos vinculados a la discontinuidad en el acceso a medicación.

En este contexto **los equipos de salud vienen padeciendo, al igual que el conjunto de trabajadores y trabajadoras, una importante pérdida del poder adquisitivo.** A eso se le suman la sobrecarga laboral y el pluriempleo, impactando negativamente en la calidad de vida de los y las trabajadoras de la salud, pero también y fundamentalmente en la calidad de atención que pueden ofrecer a la población. A esto se suma la crisis que transitan las Residencias Nacionales, cuyas condiciones laborales se vieron profundamente precarizadas además de recortarse los cupos para este año en prácticamente todos los efectores.

Ante este complejo escenario, quienes nos convocamos aquí hoy sostenemos que las provincias y municipios no pueden ni deben enfrentar en soledad las consecuencias del abandono nacional. El federalismo no puede convertirse en una transferencia unilateral de responsabilidades sin recursos. Cada programa desfinanciado, cada medicamento faltante y cada política nacional desmantelada repercute directamente sobre hospitales, centros de atención primaria y gobiernos locales que sostienen cotidianamente el cuidado de nuestra población. Y fundamentalmente atacan y erosionan la salud de las y los argentinos.

Defendemos una concepción de **la salud como derecho social y humano fundamental**, no como privilegio ni mercancía. Reivindicamos el rol del Estado como garante de políticas públicas universales, integrales y equitativas, con capacidad de planificación, regulación y presencia territorial y le exigimos al gobierno nacional que asuma las responsabilidades que tiene.

Nuestro sistema de salud no era perfecto, pero el gobierno libertario empeoró todos los problemas que tenía; rompió la mayoría de las políticas que funcionaban bien; deterioró la capacidad de acceso a la salud de todos quienes vivimos en Argentina y quiere transformar a nuestro país, que siempre fue humanista y sostuvo el derecho a la salud como bandera, en un lugar donde el que no puede pagar sufra y muera por causas evitables. No lo vamos a permitir.

Por ello, exigimos al Gobierno Nacional que se haga cargo del daño que está produciendo. Es urgente la inmediata restitución del financiamiento sanitario, la recuperación de los programas nacionales desmantelados, la regularización del envío de vacunas, medicamentos e insumos, el fortalecimiento de las políticas de salud mental, salud sexual y reproductiva y de atención primaria de la salud, así como la apertura urgente de una mesa federal de trabajo con las provincias y municipios. Los miles de trabajadores y trabajadoras de la salud que estamos acá hoy no estamos dispuestos a abandonar a nuestro pueblo a su suerte y vamos a luchar incansablemente para que paguen en las urnas el sufrimiento que están ocasionando. ¡No al ajuste en salud, con la salud del pueblo no se jode, Milei!

La salud no es un privilegio: es un derecho. Por eso exigimos:

- **No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar**
- **No al desfinanciamiento del PAMI**
- **No al desguace o desfinanciamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones**
- **No al retroceso en políticas de Salud Mental**
- **Cumplimiento de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad**